

X Jornadas Interescuelas/Departamentos de Historia. Escuela de Historia de la Facultad de Humanidades y Artes, Universidad Nacional del Rosario. Departamento de Historia de la Facultad de Ciencias de la Educación, Universidad Nacional del Litoral, Rosario, 2005.

'Devaluacionistas' y 'dolarizadores'. La construcción social de las alternativas propuestas por los sectores dominantes ante la crisis de la Convertibilidad. Argentina 1999-2001.

Ana Gabriela Castellani y Mariano Szkolnik.

Cita:

Ana Gabriela Castellani y Mariano Szkolnik (2005). *'Devaluacionistas' y 'dolarizadores'. La construcción social de las alternativas propuestas por los sectores dominantes ante la crisis de la Convertibilidad. Argentina 1999-2001. X Jornadas Interescuelas/Departamentos de Historia. Escuela de Historia de la Facultad de Humanidades y Artes, Universidad Nacional del Rosario. Departamento de Historia de la Facultad de Ciencias de la Educación, Universidad Nacional del Litoral, Rosario.*

Dirección estable: <https://www.aacademica.org/000-006/418>

ARK: <https://n2t.net/ark:/13683/e80H/ake>

Acta Académica es un proyecto académico sin fines de lucro enmarcado en la iniciativa de acceso abierto. Acta Académica fue creado para facilitar a investigadores de todo el mundo el compartir su producción académica. Para crear un perfil gratuitamente o acceder a otros trabajos visite: <https://www.aacademica.org>.

Xº JORNADAS INTERESCUELAS / DEPARTAMENTOS DE HISTORIA

Rosario, 20 al 23 de septiembre de 2005

Título: “‘Devaluacionistas’ y ‘dolarizadores’. La construcción social de las alternativas propuestas por los sectores dominantes ante la crisis de la Convertibilidad. Argentina 1999-2001”

Mesa Temática: “Política y economía en la Historia Argentina reciente (1983-2001). Democratización excluyente y reformas económicas de mercado”.
Coordinadores: Alfredo Pucciarelli (UNLP) - Paula Canelo (UBA) - Mariana Heredia (UBA)

Pertenencia institucional: Universidad de Buenos Aires, Facultad de Ciencias Sociales.

Autor/res:

Ana Gabriela Castellani, Socióloga, investigadora CONICET / UBA, docente de la Facultad de Ciencias Sociales (UBA)

anacast@infovia.com.ar TE: (011) 4361-1769

Mariano Szkolnik, Sociólogo, docente de la Facultad de Ciencias Sociales (UBA)

szunkov@yahoo.com.ar TE: (011) 4254-1353

“Devaluacionistas’ y ‘dolarizadores’. La construcción social de las alternativas propuestas por los sectores dominantes ante la crisis de la Convertibilidad. Argentina 1999-2001”

*Ana Castellani**

*Mariano Szkolnik***

Introducción

En la consideración de amplios sectores de la sociedad argentina, el principal logro del modelo económico basado en la convertibilidad, se hallaba en el hecho de haber conseguido mantener el valor del dólar a resguardo de los espasmódicos movimientos a los que había estado expuesto en el pasado. Quienes habían puesto en marcha el Plan de Convertibilidad argumentaban que, de esa manera, se había inaugurado un periodo en la historia argentina que se extendería por décadas, el cual estaría caracterizado por la estabilidad indefinida de la economía. Así, ésta se tornaría atractiva al ingreso de los capitales los cuales, una vez invertidos, contribuirían a incrementar la riqueza nacional y el bienestar de la población en general.

Tan inusitada medida logró imponerse por el alto grado de consenso que alcanzó la interpretación construida por los sectores dominantes sobre las causas de la crisis hiperinflacionaria de fines de los años ochenta; es decir, aquélla que le atribuye la responsabilidad de la “debacle” a la incapacidad del Estado “populista” para controlar los principales resortes de la actividad económica.¹ Ante el “sin sentido social” que trajeron aparejados la crisis estructural de las empresas públicas y la estampida de los precios que acompañaba la carrera del dólar, una medida tan cara al sentido común como referir el valor del peso al de una moneda de probada solidez contó con un extendido apoyo social. Quedaba fuera de la consideración general el interrogante referido a cómo se sostendría la paridad cambiaria o cómo afectaría el congelamiento de este precio relativo a la economía en su conjunto o, más específicamente, cómo impactaría el nuevo esquema sobre

* Socióloga, investigadora CONICET / UBA, docente de la Facultad de Ciencias Sociales (UBA), anacast@infovia.com.ar

** Sociólogo, docente de la Facultad de Ciencias Sociales (UBA), szunkov@yahoo.com.ar

¹ El análisis sobre el rol de los sectores dominantes en la interpretación de la crisis hiperinflacionaria fue elaborado inicialmente en Basualdo (1999) y analizado en profundidad en Levit y Ortiz (1999).

los sectores de la producción. El Plan de Convertibilidad logró, así, aglutinar un inédito consenso social, sustentado en el imaginario construido en torno de las ideas de *estabilidad monetaria* y *modernización económica*. Tal fue la fuerza de este consenso que, aún cuando los pilares sobre los cuales se apoyaba todo el esquema convertible se habían debilitado profundamente —el fin del ciclo de ingreso de capitales externos vía endeudamiento, especulación o inversión directa—, fueron pocas las voces que, tras la recesión iniciada en 1998, pusieron en cuestión su continuidad.

A partir de la devaluación de la moneda brasileña en enero de 1999, resultó claro que el régimen de convertibilidad tenía los días contados. A la par del agotamiento de los sustentos materiales del modelo, aquellas fracciones de la clase dominante que se veían perjudicadas por el atraso cambiario en un contexto de apertura (en especial, los industriales exportadores que competían en el mercado internacional con sus pares brasileños), comenzaron a esgrimir en la arena pública (a través de sus voceros corporativos) diversos argumentos para promover y justificar una devaluación que permitiese mejorar el nivel de competitividad de la economía argentina. Por otro lado, las fracciones claramente beneficiadas por el modelo convertible (el sector bancario y financiero, las empresas privatizadas y las grandes firmas extranjeras que habían adquirido activos fijos durante el último lustro de la década del '90) proponían, a través de “prestigiosos” economistas y algunos de los principales funcionarios de gobierno, la dolarización de la economía.

Ya en ese entonces algunos trabajos se ocuparon de señalar con precisión cuáles serían los sectores que se verían beneficiados al implementarse una u otra propuesta. En ellos, también se llamaba la atención sobre el grave perjuicio directo que, para el conjunto de los asalariados, conllevaría la concreción de cualquiera de los proyectos puestos a consideración pública; sin embargo, lo más destacable es que se advertía sobre el hecho de que nuevamente eran los sectores económicamente dominantes los que estaban fijando los márgenes dentro de los cuales debían discutirse las alternativas al modelo económico vigente.²

² Al respecto consultar Basualdo (2000) y Schorr (2001). Un primer intento de conciliar elementos de análisis económico y sociológico en la interpretación del fin de la convertibilidad se encuentra en Castellani y Schorr (2003).

El presente trabajo recupera estos aportes, considerando que *los discursos contruidos en torno de los proyectos devaluador y dolarizador deben leerse como la exteriorización de las disputas al interior del bloque dominante en el momento en que el modelo de la convertibilidad entraba en su fase final.*³

Desde estas páginas se pretende contribuir con la línea de interpretación mencionada, realizando un análisis de las estrategias desplegadas por los principales actores involucrados en la construcción social de ambos proyectos, con la intención de echar luz sobre algunas cuestiones relevantes y poco exploradas hasta el presente: ¿Qué actores impulsaron cada uno de los proyectos? ¿Estos actores eran los que representaban tradicionalmente en el país los intereses de los sectores beneficiados con cada propuesta? ¿Qué arcos de solidaridad y de enfrentamiento se fueron construyendo en cada coyuntura? ¿Cuáles fueron las principales líneas de argumentación que se esgrimieron en cada momento?⁴

Para responder estas cuestiones, la investigación empírica se centró en la búsqueda, sistematización y análisis de fuentes primarias y secundarias.⁵ La presentación de los resultados se divide en dos partes, una para el análisis de cada propuesta y otra para el análisis de los principales actores involucrados. La intención es presentar conjuntamente, para cada caso, un análisis cronológico de las diversas lógicas de acción colectiva desplegadas por los actores que participaron en la construcción de cada propuesta y un análisis de los principales argumentos que se utilizaron para apoyar o criticar a cada uno de los proyectos. Finalmente, se elaboran una serie de conclusiones a la luz de los hallazgos presentados.

I- La construcción social de las alternativas: dolarización vs devaluación

³ Debe recalcar que, si bien dichas argumentaciones —emitidas en forma aislada, o articuladas en una estrategia colectiva— no necesariamente precipitan la caída de un plan económico o del gobierno que lo sostiene, contribuyen, al menos, a generar las condiciones para que los consensos establecidos puedan comenzar a ser cuestionados.

⁴ Recientemente se ha publicado un trabajo que analiza el rol de la UIA en la implementación del proyecto devaluacionista (Gaggero y Wainer: 2004) pero hasta, el momento, no existen trabajos que analicen específicamente el proceso de construcción social de ambas propuestas.

⁵ Fundamentalmente: diario Clarín, las revistas Mercado y Prensa Económica, documentos de las corporaciones empresarias y de los principales centros académicos de la ortodoxia liberal. En el trabajo de búsqueda y sistematización se contó con la valiosa colaboración de Laura Vennera, alumna de la Carrera de Sociología de la UBA.

La devaluación de la moneda brasileña, en enero de 1999, fue el detonante que colocó en primer plano la discusión pública sobre el futuro del régimen de convertibilidad. A ningún observador se le podía escapar que la modificación del tipo de cambio y, por consiguiente, el incremento inmediato de la competitividad de la economía brasileña, ponía en jaque la precaria situación de la economía argentina, en recesión desde 1998. Fue en ese contexto en el que comenzó paulatinamente a desgranarse el denominado “Consenso de la Convertibilidad” y tomaron estado público las alternativas propuestas por los sectores dominantes.

La *propuesta dolarizadora* se hizo pública por boca de los principales funcionarios del gobierno y los economistas más respetados del *establishment* (principalmente miembros del CEMA). Su vigencia sufrió vaivenes significativos a lo largo de todo el trienio: adquirió notoriedad e impulso durante el primer semestre del año 1999, perdió espacio en la discusión pública durante el resto de ese año y durante todo el 2000, y volvió a instalarse como una alternativa, incluso barajada por el propio gobierno de la Alianza, durante los últimos meses del gobierno de De la Rúa.

Por el contrario, la *propuesta devaluacionista* se mantuvo vigente durante todo el período analizado, impulsada por las corporaciones empresarias agrupadas en el autodenominado Grupo Productivo, que logró crear un amplio arco de solidaridades que incluía a diversos líderes sindicales y a varios políticos de los principales partidos, utilizando un remanido recurso ideológico: presentar la propuesta propia como un beneficio para toda la en oposición a los sectores “foráneos y/o improductivos”. Igualmente, teniendo en cuenta las estrategias desplegadas, es importante señalar dos cuestiones: a) los devaluacionistas eludieron sistemáticamente mencionar el término “devaluación” en sus declaraciones; más bien utilizaron eufemismos que daban cuenta de las potencialidades reales y positivas de la medida propuesta, dándole a ésta un carácter *velado*; y b) hacia fines del 2001, el pedido (cada vez menos) encubierto de devaluación comenzó a ir de la mano de una propuesta de pesificación de las deudas contraídas en dólares, medida que se aplicó para todas las deudas en febrero del 2002, luego de una fuerte ofensiva llevada adelante por estos mismos actores.⁶

⁶ Inicialmente, en enero del 2002, la pesificación fue decretada para las deudas contraídas en dólares por montos de hasta cien mil pesos. Luego de una feroz ofensiva de las principales corporaciones empresarias y diversos grupos económicos, la medida fue extendida hacia todas las deudas. Sobre los

Frente a esta perspectiva general, es necesario reconstruir con mayor detalle cada uno de los proyectos elaborados en el seno de los sectores dominantes, prestando especial atención a las alianzas sociales que se tejieron en torno a cada uno y a las principales estrategias de acción (incluyendo las discursivas) que utilizaron los actores involucrados.

1.1 La estrategia dolarizadora: cómo llevar la convertibilidad al extremo

Como se mencionó oportunamente, en una primera etapa el proyecto dolarizador surgió de la mano del propio presidente Menem, quien lanzó la propuesta en una reunión de Gabinete Nacional tras la devaluación del real. Junto a Menem se posicionaron en la ofensiva de la dolarización los principales economistas ortodoxos, varios de ellos funcionarios de gobierno y miembros del CEMA, entre los cuales ocuparon un lugar destacado, el presidente del Banco Central, Pedro Pou, y el ministro de economía, Roque Fernández.⁷ El eje de la estrategia discursiva consistió en esgrimir *argumentos técnicos* propios del “saber experto” de los economistas que procuraban explicar al resto de la sociedad la necesidad de “eliminar la incertidumbre cambiaria”, situación que llevaría (casi de inmediato) a un descenso de la tasa de interés y, por ende, a un aumento de la inversión y de la oferta de puestos de trabajo.⁸ En menor medida, los funcionarios del gobierno menemista utilizaron *argumentos estratégicos*, mediante los cuales se enfatizaba la conveniencia de anticiparse a la tendencia mundial hacia la regionalización monetaria integrada por tres áreas de influencia: la del dólar, la del euro y la del yen.

Por otra parte, el arco opositor se conformó con varios y heterogéneos actores: los economistas más o menos heterodoxos como Aldo Ferrer, Jose Luis Machinea, Remes Lenicov y Aldo Buscaglia, que contrargumentaron con la misma estrategia de sus colegas dolarizadores, apelando a *argumentos de orden técnico* resaltando las desventajas macroeconómicas que podría generar la adopción de la moneda norteamericana; líderes políticos tradicionales de la UCR, como Raúl

beneficios deparados a las grandes empresas por esta medida, consultar el excelente trabajo de Lozano y Schorr (2002).

⁷ Otros economistas que se mostraron favorables a la propuesta dolarizadora, fueron Pablo Guidotti (vice ministro de Economía); Guillermo Calvo (prestigioso economista del BID), Martín Lagos (vicepresidente del BCRA) y Jorge Castro (secretario de Planeamiento Estratégico en el gabinete de Roque Fernández).

⁸ Ver Clarín, 23 y 24-01-99.

Alfonsín y Rodolfo Terragno, que centraron sus críticas en *argumentos de orden político* (por ejemplo, la pérdida de la soberanía nacional) y *jurídicos* (la dolarización como acto de gobierno contrario a la Constitución Nacional); y diversos miembros del gobierno de Brasil, que alertaron sobre la segura desarticulación del Mercosur si se concretaba la propuesta, apelando a cuestiones de índole *estratégico-regional*.

Llamativamente, el entonces gobernador bonaerense Eduardo Duhalde (luego férreo opositor del proyecto dolarizador), manifestó un tibio apoyo a esta alternativa, adhiriendo a los *argumentos generadores de confianza* esgrimidos por sus principales impulsores, al sostener que la dolarización constituía una fuerte señal de que “se va a defender en serio la estabilidad.”⁹

El escenario de confrontación local se complejizó cuando, a mediados de marzo de 1999, el FMI publicó un documento en el que se proponía la dolarización, aunque sólo para aquellas economías castigadas por procesos inflacionarios. El documento hizo que se incorporaran al debate sobre la dolarización algunos miembros del gobierno de los Estados Unidos y del FMI, así como también, ciertos académicos de algunas de las principales universidades del Norte, generalmente con argumentos favorables a la propuesta. Estos actores propusieron una dolarización unilateral, sin respaldo del tesoro norteamericano.

La discusión en torno de la propuesta alcanzó su punto más álgido a fines de mayo cuando el propio presidente del BCRA hizo público un detallado plan de dolarización señalando sus principales ventajas: imposibilidad de modificación unilateral de la política monetaria y cambiaria; eliminación del riesgo cambiario; disminución de la tasa de interés doméstica; impacto positivo sobre el monto total de la deuda externa; aumento de la inversión, y crecimiento y estabilidad del sector bancario y financiero local. Esto suponía que la dolarización, al eliminar por completo la incertidumbre cambiaria, iba a tener un impacto positivo sobre la productividad, el salario real y el crecimiento.¹⁰

Este pronunciamiento, por parte de un hombre clave del gobierno, desató una fuerte oleada de críticas provenientes de los más diversos sectores del espectro local y extranjero. Los políticos se abocaron a señalar la pérdida de soberanía implícita en el abandono del control sobre la política monetaria; los

⁹ Clarín, 23-01-09.

¹⁰ Ver *Clarín* del 26 de mayo de 1999.

economistas, centraron sus críticas en cuestionar los efectos positivos señalados por Pou, advirtiendo que era difícil pensar que se pudiera incrementar la “confianza de los mercados” cuando los indicadores básicos de la economía real presentaban signos marcadamente negativos. Hacia fines de año, la dolarización sólo era propiciada por el gobierno y algunos economistas ortodoxos.

Tras el triunfo de la Alianza, la discusión pública sobre la crisis del modelo económico pasó —al menos en lo inmediato— a un segundo plano. En materia económica, el nuevo elenco gubernamental mantuvo su discurso de campaña: “un peso igual un dólar”. Durante todo el año 2000 la dolarización fue defendida públicamente sólo por Menem, quien insistía con la idea del “*shock* de confianza” que podía generar la medida y la posibilidad de disminuir el costo del capital al eliminar el riesgo cambiario.

Sin embargo, a pesar de que no tuvo la misma presencia mediática que en 1999, la discusión sobre esta propuesta cobró nuevos bríos hacia mediados de febrero de 2000, cuando un miembro del gabinete económico de Machinea viajó a los EE.UU. para asistir a un seminario organizado por el FMI en el que se discutieron los pros y los contras de la dolarización, generando crispadas críticas, incluso desde el propio seno del gobierno de la Alianza. Esta misma disputa volvió al ruedo en el último semestre del año, cuando se generaron dos nuevos frentes de conflicto en torno a la dolarización: por el lado externo, se produjo un enfrentamiento entre el poder ejecutivo estadounidense (encabezado por Bill Clinton) y el Congreso de ese mismo país, por la presentación de un proyecto de ley realizada por el titular del Comité Económico Conjunto del Congreso, incitando a varios países subdesarrollados a adoptar el dólar como moneda oficial;¹¹ por el lado interno, se instaló en el propio partido radical una disputa en torno a las implicancias presentes y futuras de la convertibilidad, ante la feroz crítica que, al respecto realizara Raúl Alfonsín.

En efecto, como principal contrargumento frente a la alternativa dolarizadora, el ex presidente planteó que, de ponerse en práctica esta medida, se cristalizarían y profundizarían los notables perjuicios generados por el modelo convertible. Textualmente, sostuvo en público que el plan aplicado en 1991 fue “el episodio

¹¹ Este proyecto de ley excluía la supervisión de los EE.UU. sobre los bancos residentes en otros países y dejaba en claro que la Fed no tendría obligación alguna de actuar como prestamista de último recurso de un sistema bancario extranjero. Al respecto, consultar Clarín, 26-07-2000.

más grave del siglo para la economía de la Argentina”¹², marcando un hito en la estrategia de acción comunicativa de los opositores a la dolarización: por primera vez los actores tradicionales comenzaban a romper el férreo consenso creado en torno a la convertibilidad, criticándola abiertamente y manifestando, por elevación, su abierta oposición a la propuesta de los dolarizadores. Estas declaraciones obligaron a los principales funcionarios de gobierno a salir en defensa de la Ley de Convertibilidad (a la que consideraban la “piedra angular” de la gestión económica¹³) y marcaron el inicio de una larga zaga de desencuentros entre los miembros de la alianza gobernante, que llegó a su punto más crítico en octubre del año 2000, momento en el cual el vicepresidente Carlos Alvarez presentó su renuncia.

Durante el año 2001, la estrategia dolarizadora adquirió un notable impulso. Ante la certeza de que el modelo estaba perdiendo toda base de sustentación, la propuesta de la dolarización volvió a la palestra como un intento de mostrar la firme convicción del gobierno de llevar al extremo la convertibilidad, antes que pagar el elevado costo político que implicaba eliminarla.

Además de los tradicionales impulsores, a partir de octubre se sumaron varios funcionarios que anteriormente se habían pronunciado en contra, como el propio presidente De la Rúa.¹⁴ De esta forma, la alianza pro dolarización quedó constituida por los economistas más ortodoxos (el destituido Pou y el ex ministro Fernández), algunos funcionarios de gobierno (Colombo, Gallo y De Santibáñez), el presidente De la Rúa y el ex presidente Menem. El flamante ministro Cavallo alternó su posición pública entre una defensa acérrima de la Convertibilidad, una propuesta de flexibilización cambiaria más cercana a una devaluación encubierta (la “canasta de monedas”) y la adopción de la dolarización como una alternativa extrema ante una posible devaluación.

Del otro lado, el arco opositor a la ofensiva dolarizadora involucró a varias corporaciones empresarias lideradas por la UIA y aglutinadas en el Grupo Productivo, la CGT encabezada por Hugo Moyano, los principales líderes del PJ bonaerense (entre los que se destacaban Eduardo Duhalde y Carlos Ruckauf) y

¹² Clarín, 13-10-2000

¹³ Chrystian Colombo (jefe de gabinete), en declaración del 12-10-2000.

¹⁴ El 5 de octubre el gobierno reconoce públicamente por primera vez, la posibilidad de dolarizar la economía.

varios dirigentes de la UCR (Ángel Rozas, Leopoldo Moreau y Rodríguez Giavarini).

Por otra parte, y sin alinearse conjuntamente con los actores mencionados debido a profundas divergencias ideológicas, se encontraban los economistas heterodoxos del Grupo Fénix y la central sindical opositora liderada por Víctor De Gennaro (CTA) quienes fueron los primeros en advertir públicamente sobre los riesgos que implicaba adoptar los parámetros de discusión propuestos por los sectores dominantes en el debate sobre la crisis del modelo.

Los sucesos del 19 y 20 de diciembre marcaron el final de la estrategia. A esta altura la alternativa dolarizadora era más bien un último recurso en pos de recobrar la confianza perdida que una propuesta de política económica mínimamente viable. Fue entonces cuando los partidarios de una devaluación supieron que el camino había quedado despejado; el Consenso de la Convertibilidad estaba herido de muerte y la modificación cambiaria se iba prefigurando, ante los ojos de la mayor parte de la sociedad, como un hecho inevitable.

1.2 La estrategia devaluacionista: la devaluación innombrada

La vigencia del consenso favorable a la paridad fija dificultó la explicitación abierta de la propuesta devaluacionista. Los actores que promovían una devaluación debieron fundar sus argumentos y proponer sus soluciones con la mayor cautela verbal posible. De esta forma, el proyecto devaluatorio devino en un proyecto *encriptado*; sus impulsores tuvieron que dar largos rodeos para evitar reconocer que sus propuestas para superar la crisis conducían directamente hacia una devaluación.

A comienzos del año 1999, la UIA y la Cámara Argentina de Exportadores se unieron en exigirle al gobierno que instrumentase una serie de “medidas compensatorias” para paliar las consecuencias generadas por la devaluación de la moneda de Brasil. Básicamente, los pedidos de entonces pasaron por la aplicación de rebajas arancelarias, impositivas y la eliminación de los subsidios financieros a los productos originarios del país vecino. Ceñidos por el corset cultural imperante, los actores se ocuparon de destacar su respaldo irrestricto a la paridad *uno a uno*, aunque poniendo en claro que era necesario “mejorar el tipo

de cambio de las exportaciones fabriles” para poder competir con Brasil.¹⁵ Es por ello que en esta etapa inicial primaron los *argumentos encubiertos*. Sin lugar a dudas, fue la UIA la principal promotora de las medidas mencionadas.¹⁶ Sus reclamos lograron el apoyo de varios hombres del espectro político, entre los que se desatacaron Alfonsín, Ruckauf y Ramón Ortega.

Aquellos que vieron en estos reclamos un peligro en ciernes sobre la política cambiaria sostenida desde 1991, también movilizaron rápidamente sus recursos y salieron al ruedo para contrarrestar la “encubierta” ofensiva devaluatoria. Los economistas jefe de los principales bancos se dedicaron a señalar en diversos medios gráficos que la devaluación sería “un golpe terrible para las empresas, bancos y el gobierno, que están muy endeudados en dólares”.¹⁷

Luego de esta primera etapa, el proyecto adquirió un nuevo curso al incorporar un aliado que terminaría resultando estratégico: la corporación sindical. En efecto, a comienzos del año 2000, los principales líderes sindicales instalaron públicamente dos elementos relevantes para la construcción de la estrategia devaluacionista. En principio, el secretario de la CGT oficial, Rodolfo Daer, expresó la necesidad de constituir una alianza policlasista para impulsar una alternativa a la crisis; de armar un “gran acuerdo nacional que otorgue más competitividad aún *con esta paridad*, pero tocando a los sectores beneficiados estos años: en finanzas, en sectores privatizados, en la energía, los peajes... todos los que llevan el dinero que ganan aquí”.¹⁸ Esta construcción pública del adversario contribuyó a consolidar lentamente la noción de un *nosotros* compuesto por los “sectores nacionales de la producción y el trabajo” y un *ellos* conformado por “intereses especulativos” y “foráneos”. La utilización de estos ideogemas, le permitió al proyecto teñirse de una impronta “nacional”, orientada a la “defensa del interés general”, facilitando la incorporación y articulación de diversos actores sociales en torno de la alianza devaluacionista.

Un segundo elemento fundamental lo constituye el hecho de que la corporación sindical fue la primera en pronunciarse abiertamente por una devaluación, horadando las bases del consenso social construido en torno a la convertibilidad. En efecto, fue el propio secretario de la CGT disidente, Hugo

¹⁵ Clarín, 17-01-99

¹⁶ Sobre el rol de la UIA en todo este período, consultar Gaggero y Wainer, op.cit.

¹⁷ Declaraciones de Arturo Porzecansky del ING Baring en una nota publicada en Clarín el 22 de mayo de 1999.

Moyano quien por primera vez durante el período en cuestión elevó públicamente un reclamo expreso de devaluación, lo cual marcó un punto de inflexión en la estrategia global: de la utilización exclusiva de *argumentos encubiertos* se pasó a una combinación de éstos con otros *abiertamente favorables* a la devaluación (exclusivamente a cargo de los sindicalistas).¹⁹

Como contraparte, este cambio en la estrategia de la alianza devaluacionista generó un reforzamiento de la estrategia opositora. En efecto, casi la totalidad del espectro político convalidó públicamente la vigencia de la convertibilidad. En este punto cabe hacer una excepción: desde la CTA, principal central sindical opositora, se denunció la intencionalidad encubierta puesta en marcha por las corporaciones empresarias.²⁰

Hacia los últimos meses de vida de la convertibilidad (entre marzo y diciembre de 2001) se verificó el mayor despliegue de la estrategia argumentativa devaluacionista. En efecto, con la llegada de Cavallo al gobierno se puso en marcha el Plan de Competitividad. Con esta medida, el gobierno respondía a la demanda de los exportadores, esperando mejorar levemente el tipo de cambio para incrementar el nivel de competitividad. El exponente máximo de la estrategia dolarizadora, Carlos Menem, instaló públicamente la “inminencia de una devaluación” instando a todos los argentinos endeudados a que compraran dólares para protegerse y evitar “tener que pagar sus créditos con una moneda devaluada”.²¹ Paralelamente, en el frente externo comenzaron las presiones de los organismos internacionales para que se realizara una devaluación de la moneda seguida de una reestructuración de la deuda externa.

En resumen, la ofensiva pública contra la convertibilidad estuvo a cargo de la alianza integrada por las corporaciones empresarias (en especial la UIA); las corporaciones sindicales (excluyendo la CTA); y algunos líderes políticos destacados (especialmente, Alfonsín). Todo esto, en un contexto en donde los principales organismos acreedores comenzaron a mostrar evidentes fisuras en torno a cómo actuar frente a la crisis argentina.

Por otro lado, el arco de apoyos al modelo en crisis quedó compuesto, casi exclusivamente, por los miembros del gobierno nacional, en especial el presidente

¹⁸ Clarín, 18-01-00. Énfasis añadido

¹⁹ Clarín, 18-01-00

²⁰ Las declaraciones del economista Claudio Lozano relevadas en Clarín del 18 de enero del 2000 confirman esta afirmación.

y su ministro de economía. La estrategia discursiva de estos actores se sostuvo en la utilización de *argumentos alarmistas* referidos al “caos”, al “salto al vacío”, al “desastre” que podría sobrevenir tras una devaluación.

Finalmente, en diciembre del 2001 (y ante la debacle inminente del régimen), la disputa por la crisis del modelo se agudizó en el interior del FMI entre aquellos que exigían la devaluación y aquellos que defendían la propuesta dolarizadora. Incluso, se llegó a plantear que se implementaran conjuntamente, es decir devaluar para luego dolarizar. Cuando la fracción encabezada por Anne Krueger (partidaria de una devaluación) logró imponer su visión en el organismo de crédito, el camino para la ofensiva devaluacionista quedó definitivamente allanado.

En un último intento por impedir la salida de la convertibilidad, se conformó una transitoria alianza entre el ex presidente Menem y varios de los principales hombres del gobierno (incluyendo al presidente De la Rúa) quienes se reunieron para analizar la posibilidad de implementar una dolarización unilateral de la economía. Pero a mediados de diciembre el Plan de Convertibilidad vivía sus horas de agonía, y tras la caída del gobierno, la ofensiva devaluatoria no tuvo límites: sumó nuevos apoyos, utilizó argumentos, e incorporó públicamente a su propuesta el pedido de pesificación de las deudas contraídas en dólares. Frente a esta ofensiva, sólo quedaron algunas empresas extranjeras y los cuerpos diplomáticos de sus países de origen, que reclamaron compensaciones frente a los gobiernos que vertiginosamente se sucedieron desde el 20 de diciembre.²²

Cuando el fin de la convertibilidad fue un hecho, la cruzada de la alianza devaluacionista se centró en la pelea por la pesificación de todas las deudas, medida que el gobierno provisional de Duhalde implementó a comienzos del mes de febrero de 2002 y que implicó que los sectores exportadores no sólo se vieran beneficiados por la modificación del tipo de cambio, sino también por la licuación de sus pasivos internos.²³ Fue precisamente en esta última etapa en donde se registró el principal triunfo devaluacionista: la interpretación social de la devaluación como un “fenómeno natural e inevitable” y no como un hecho social

²¹ Ver Clarín 21-04-2001.

²² Según los principales medios gráficos, se trataba de las empresas de servicios Repsol-YPF, Aguas de Barcelona, Gas Natural, Telefónica, Edesur, Dycasa, Acesa (Acceso Oeste), Mafpre Aconcagua y Prosegur y los bancos BB.VV-Francés y Río Santander. Al respecto ver Clarín y La Nación del 28-12-01

²³ La ofensiva fue encabezada por la UIA y acompañada por la CGE, la CAME y otras corporaciones de segundo grado del sector industrial

construido al calor de las luchas intestinas desatadas en la clase económicamente dominante. Este nuevo artilugio simbólico permitió ocultar a los verdaderos promotores y beneficiarios de una inaudita traslación de ingresos en perjuicio de la mayor parte de la población, generada tras la devaluación y pesificación de la economía.

II- El posicionamiento de los principales actores a lo largo de la crisis

Es factible suponer que los diversos actores que intervinieron en la construcción de las alternativas devaluacionista y dolarizadora adaptasen sus argumentos a los vaivenes propios del contexto social, político y económico imperante, construyendo consenso para consolidar socialmente su propuesta. Sin embargo, un análisis diacrónico de los posicionamientos públicos y de las estrategias argumentativas que se desplegaron en cada caso revela que éstas tendieron a permanecer, al menos en líneas generales, relativamente estables en el tiempo. No fue sino hasta la crisis terminal del esquema de paridad cambiaria fija que se produjeron defecciones parciales entre quienes apoyaban o rechazaban alguno de los programas propuestos. A continuación se presenta un somero análisis de los posicionamientos y estrategias discursivas llevadas adelante por los actores en pugna, tratando exponer las razones que podrían dar cuenta de cada uno de estos particulares derroteros.

II.1. La Corporación Política

Sin lugar a dudas la corporación política (entendida como el conjunto de altos funcionarios de gobierno y principales dirigentes de los partidos políticos mayoritarios), jugó un rol central en la construcción social de las dos alternativas postuladas como superadoras del modelo en crisis. Su posicionamiento no fue unívoco ni homogéneo; por el contrario, se presentaron profundas divergencias en torno a las propuestas a seguir ante la crisis, no sólo entre los diversos partidos sino, fundamentalmente, dentro de cada uno de ellos y de los distintos gobiernos que se sucedieron a lo largo del período.

Carlos Menem fue quien adoptó tempranamente la idea de la dolarización como "superación lógica" de la convertibilidad, defendiendo dicha propuesta hasta que su camino quedara definitivamente cerrado cuando se produjo la devaluación a comienzos del año 2002. Menem advertía públicamente respecto del caos que sobrevendría de abandonarse la relación del *uno a uno*, blandiendo ante la sociedad en general, y los sectores populares en particular, el fantasma de un pasado hiperinflacionario, de desasosiego y sin sentido social el cual había conjurado durante los primeros años de su presidencia.

Sin que su estrategia pueda dissociarse de la estrategia argumentativa de los sectores interesados en que la devaluación no se produjera (sector financiero y empresas privatizadas), la constante exposición pública hacía evidentes los fines políticos perseguidos por el ex-presidente. Menem buscó posicionarse como el único dirigente capaz de tomar el timón de la nación, y de recrear la hegemonía detentada durante el extenso periodo de su mandato. La apelación a la posibilidad de una devaluación habría operado entonces como su estrategia personal para mostrarse como la opción excluyente frente al inevitable caos preanunciado en la crisis del modelo. Sólo Menem podía asegurar que los "logros" alcanzados durante su gestión pudieran extenderse en el tiempo, y que los beneficios de un eventual nuevo ciclo de crecimiento económico abarcaran a una mayor proporción de la población.

Contrariamente a la línea seguida por Menem, la posición pública adoptada por *Domingo Cavallo* osciló entre el eclecticismo componedor entre intereses divergentes y la condena abyecta a la posibilidad de la modificación del régimen monetario por él instaurado. Sabedor de que su futuro político se hallaba indisolublemente ligado al esquema *uno a uno*, su posición promedio tendió a ubicarse en la negativa a la devaluación; debían ser otros los caminos a seguir para que la economía recuperase competitividad internacional. Su estrategia, como ministro durante el breve gobierno de la Alianza pareció consistir en intentar ganar tiempo a la espera de que se revirtiese, en el corto o mediano plazo, el adverso escenario crediticio internacional, dando nuevos bríos a un modelo agónico. Componer intereses incompatibles, compensar pérdidas, a la vez que se ajustaba el gasto público y se promovía la reducción global de los salarios, fueron la manifestación de ese intento por ganar la carrera contra el tiempo. De aquí se desprende que su recorrido argumental haya tomado múltiples y complejas

facetas, a excepción del reclamo abierto de una devaluación. A días de presentar su renuncia, Cavallo aceptó la posibilidad de dolarizar la economía como recurso extremo para salvaguardar los destinos del Plan de Convertibilidad.

Una vez llegada al poder en diciembre de 1999, la coalición UCR-FREPASO leyó en la recesión y la crisis económica vigente desde hacía más de un año, no el agotamiento del modelo, sino el de una forma de hacer política que la *Alianza* venía a cambiar mediante una gestión fundada en la transparencia de los actos de gobierno y en una administración “correcta” de la cosa pública. Quedaba claro que el modelo de la convertibilidad no sería puesto en cuestión por un presidente que había ganado las elecciones prometiendo, contra toda duda, que “conmigo un peso, un dólar”. Pero al mismo tiempo que se proponía una gestión más prolija y ajustada a la legalidad, la ciudadanía esperaba que el nuevo gobierno —aunque no estaba muy claro cómo— hallase un camino hacia el crecimiento sostenido. Tras tres ministros de economía, sucesivos ajustes, recortes salariales y confiscación de depósitos bancarios, esa posibilidad quedó descartada.

Para la *Alianza*, una devaluación nunca pareció constituir una posibilidad cierta. Detrás de la proposición “alianza con la gente” se encubría el fundamento real de la acción de gobierno: la defensa de los intereses de los sectores beneficiados por la convertibilidad. Ello no significa que aún dentro de la coalición no hayan habido voces que se manifestaran en franco disenso frente a la posición oficial. Alfonsín (así como un importante sector dentro de la UCR) se opuso a la posibilidad de dolarizar la economía, a la vez que intercedía en nombre de los sectores de la producción.

Lo que demostró la *Alianza* en el gobierno fue una constancia en estrechar filas sobre la convertibilidad, y en el momento de su crisis terminal, en la posibilidad de aceptar la dolarización de la economía, manifestándose de esa forma, y de manera abrupta, el carácter sectorial de su gestión de gobierno.

Finalmente, el *Partido Justicialista* que había jugado un papel central en la consolidación de la Convertibilidad y de las reformas estructurales que la precedieron, fue el que presentó mayores fisuras en su interior en torno a los dos proyectos alternativos. Como la mayoría de los actores sociales, el Justicialismo en conjunto se encolumnó en torno a la defensa irrestricta del modelo de la convertibilidad, aún cuando éste mostrara manifiestos signos de agotamiento. Pero dentro de ese consenso general se formaron dos fracciones bien

diferenciadas: aquella liderada por Menem, principal impulsor de la dolarización; y la encabezada por los dirigentes bonaerenses más importantes, cada vez más permeables a adoptar el discurso devaluacionista. En efecto, si bien en conjunto el PJ y su candidato presidencial a las elecciones generales del '99 estrecharon filas en torno a la defensa de la convertibilidad, a su vez exigieron (o prometieron hacer efectivas una vez asumido el poder) medidas que compensaran los perjudiciales efectos que el “uno a uno” acarrearía a los sectores productivos. Se trataba de mantener la convertibilidad, pero impulsando una *Concertación Social* mediante la cual se recreara una alianza de clases de carácter populista.

El justicialismo no se declaró públicamente en favor de una devaluación hasta que los tiempos de la política y la economía se aceleraron de manera dramática en diciembre de 2001. Puesto por obra del voto popular en el rol de principal opositor, el justicialismo cambió su discurso adaptándolo a las circunstancias reales, en tanto ello le asegurara la posibilidad de reconstruir su poder. Tras un interregno de dos años, el justicialismo retomó el control del poder del Estado, mediante una estrategia que le permitió recuperar gradualmente espacios, y que poco tenía que ver con la legitimación electoral. Finalmente, el partido se montó sobre un poder que se había volatilizado en manos de la Alianza. Fue la fracción bonaerense —la más poderosa del justicialismo— la que casi inmediatamente después de reasumir el control del Poder Ejecutivo, trajo nuevamente a la vida el espectro temido por los militantes activos de la convertibilidad y la dolarización: la devaluación de la moneda en un inicial 40%.

II.2 Las corporaciones empresarias representativas de los “sectores de la producción”

Los sectores de la producción que se articularon en el denominado “Grupo Productivo”, presentaron tempranamente batalla a la continuidad de la convertibilidad y al intento de avance hacia su denominada “fase superior. Una eventual suba en el precio del dólar produciría sobre esta fracción del poder económico un doble efecto: por un lado abarataría internacionalmente el costo de la mano de obra, incrementando consecuentemente la competitividad sin que se hubieran registrado aumentos en la productividad del trabajo; por otro lado, impulsaría el proceso industrial sustitutivo debido al encarecimiento de los bienes

producidos en el exterior, aumentando de esta forma la demanda interna de los bienes de producción nacional. Pero a su vez, una devaluación encarecería los costos financieros a afrontar por las empresas que se encontraran endeudadas en dólares. Es por ello que para estos actores sociales la devaluación se planteaba como un dilema de difícil resolución.

Es en esta clave que debe entenderse su estrategia. Ahorcados por una política que si bien, de una parte, había logrado controlar la inflación, pero por otro lado había abierto el comercio dejando a la industria a merced de la competencia internacional en desigualdad de condiciones, las corporaciones empresarias productivistas debieron moverse con la mayor cautela. Esa cautela se plasmó en las propuestas acercadas al poder político para recuperar los márgenes de ganancia previos a la crisis brasileña a partir de medidas compensatorias, pero sin devaluar el peso.

En la devaluación de comienzos de 2002, y en la incorporación de altos cuadros provenientes de las corporaciones productivas en el gabinete del gobierno provisional de Duhalde, así como en la posterior pesificación de las deudas con el sistema financiero local, puede leerse el triunfo político de esta fracción del empresariado local.

II.3 Las corporaciones sindicales

El análisis del posicionamiento de las corporaciones sindicales resulta de crucial importancia ya que, en términos estructurales, la clase trabajadora se constituía en la principal perjudicada por la implementación de cualquiera de las propuestas alternativas que se barajaban frente a la crisis de la convertibilidad. La dolarización “congelaría” la regresiva estructura distributiva consolidada al calor de la convertibilidad. La devaluación tendría como efecto inmediato la caída del salario real, la cual resultaría difícilmente morigerable mediante la acción sindical y la lucha política, dada la existencia de un sobreextendido ejército de mano de obra desocupada, cuya constante presión sobre el mercado laboral conducía al salario a la baja.

De acuerdo a esta lectura, era factible suponer que la posición de la corporación sindical fuera de oposición frente a cualquiera de las alternativas, ya que éstas atentaban directamente contra los intereses de sus representados.

Pero no fue ese el lugar en el cual se ubicaron las dos principales centrales sindicales. Más bien, la postura de las mismas tendió a coincidir con la que venían sosteniendo las corporaciones empresarias “de la producción,” con la diferencia de que la argumentación sindical tuvo un carácter menos encubierto y más explícito. Exigir una devaluación abierta en un momento en el que no existía aún un consenso social favorable a la medida equivalía a comportarse como un “perro de caza” frente a una presa. Los argumentos latentes asociados a la estrategia de los actores de la producción se hicieron manifiestos en boca de líderes sindicales que parecían actuar por delegación. El porqué de esa exigencia sindical contraria a los intereses directos de sus representados es un sugestivo interrogante que excede los límites de este trabajo.

Consideraciones finales

Si bien es cierto que la devaluación, la incorporación de altos cuadros provenientes de las corporaciones productivas en el gabinete del gobierno provisional de Duhalde, y la pesificación de las deudas con el sistema financiero local pueden leerse como el triunfo político de la alianza devaluacionista, cabe aclarar que éste se asentó sobre un sólido sustrato que iba más allá de la voluntad de los actores. Los resultados presentados en esta oportunidad no pretenden sostener visiones conspirativas de la historia sino más bien contribuir al análisis de la compleja articulación entre las condiciones estructurales que definen un determinado contexto y las acciones sociales que aún en el marco de esas limitaciones permiten imponer cambios significativos.

Es posible afirmar que para que se produjera la devaluación debieron madurar una serie de condiciones. Objetivamente, era necesario que el régimen de convertibilidad se agotara por su propia lógica; un modelo basado en el endeudamiento y en el ingreso permanente de capitales del exterior seducidos por la garantía de valorización que les presentaba el Estado, no podría conseguir la perpetuación en el tiempo de no contar con el “combustible necesario”. La exigencia de contracción del gasto público y reducción permanente de los costos laborales dieron cuenta del naufragio objetivo del esquema convertible. Pero como contraparte simbólica, fue necesario que el Consenso de la Convertibilidad se desgranara y perdiera vigencia; esta última condición “subjetiva” fue la de más

lenta maduración, dado el arraigo que tenía en la población el hecho de la estabilidad relativa de los precios y la “ilusión” generada por un dólar por debajo de su valor real.

Sobre el antiguo consenso fue solapándose uno nuevo, sostenido sobre la idea de que el ingreso masivo de capitales no habría servido para potenciar la generación de riquezas, sino más bien para enajenarlas y extraerlas del ámbito nacional. La promesa de que el remate del patrimonio permitiría la expansión de la economía sobre las bases de la sobreabundancia de liquidez y la introducción de cánones de modernidad se demostró falsa o incumplida. La “plata dulce” producto del proceso de privatización y del ciclo de endeudamiento no se derramó sobre la porción mayoritaria de la sociedad, sino que contribuyó a su progresivo empobrecimiento.

Por más elaborada que pudiera parecer una acción estratégica puesta de manifiesto mediante diversas argumentaciones, su fracaso sería inevitable si los actores implicados desconocieran sus propias determinaciones, es decir, las condiciones objetivas y subjetivas del contexto en el que se desenvuelven. En este sentido, la voluntad no resulta suficiente, y quienes bregaron por una devaluación parecieron entenderlo así. El principal triunfo de esta fracción social se encuentra entonces en el hecho de haber logrado presentar su interés particular como el interés general de la sociedad, y en haber actuado pacientemente a la espera de que se produjera el contexto propicio para imponer una devaluación.

Por otro lado, quienes contribuyeron a la construcción del discurso dolarización aparentaron desconocer las determinaciones que la realidad imponía. Pero el desconocimiento no implicaba ingenuidad. Así, la estrategia dolarizadora no parecía obedecer a otra cosa más que a intentar sostener un régimen de paridad fija más allá de sus fronteras objetivas, y con éste, a sus principales beneficiarios: el sector bancario y financiero y las empresas privatizadas.

En cualquiera de los dos casos, lo más importante para destacar es el hecho de que las alternativas en torno a la salida de la convertibilidad que se instalaron y discutieron públicamente fueron las diseñadas por las fracciones sociales más beneficiadas por los cambios generados en el funcionamiento económico de la Argentina de los '90. Una vez más, al igual que en la crisis hiperinflacionaria de 1989, la lectura e interpretación de los procesos económico-sociales quedó en

manos de los sectores dominantes, imposibilitando la construcción de una alternativa viable que permitiera mejorar las condiciones materiales de vida de la mayor parte de la población.

Bibliografía citada

- Basualdo, Eduardo (1999): *Acerca de la naturaleza de la deuda externa y la definición de una estrategia política*”, FLACSO-UNQui/Página 12, Buenos Aires.
- Basualdo, Eduardo (2000): *Concentración y centralización del capital en la Argentina durante la década del noventa*. Buenos Aires, FLACSO/IDEP/UNQUI, Buenos Aires.
- Basualdo, Eduardo; Lozano, Claudio y Schorr, Martín (2003): “Las transferencias de recursos a la cúpula económica durante la administración Duhalde” en Documentos de Trabajo del IDEF/CTA, Buenos Aires.
- Castellani, Ana y Martín Schorr (2003): “¿Crisis? ¿Qué crisis? Notas sobre la debacle del régimen convertible en la Argentina”, ponencia presentada en las III Jornadas de Sociología de la UNLP, La Plata, 16 de diciembre.
- Gaggero, Alejandro y Andrés Wainer (2004): “Crisis de la Convertibilidad: la UIA y el (tipo de) cambio” en Realidad Económica número 204, Buenos Aires, mayo- junio.
- Levit, Cecilia y Ricardo Ortiz (1999): “La hiperinflación argentina: prehistoria de los años noventa”, Revista *Época* N° 1 (diciembre), Buenos Aires.
- Schorr, Martín (2001): “¿Atrapados sin salida? la crisis de la Convertibilidad y las contradicciones en el bloque de poder económico”, Área de Economía y Tecnología de la FLACSO-Sede Argentina, octubre, mimeo.

Fuentes consultadas

- Diarios *Clarín* y *La Nación*, período: 1 de enero de 1999 hasta el 31 de enero del 2002
- Revistas *Mercado*, *Prensa Económica* y *Negocios*, período: 1999-2001
- Unión Industrial Argentina (2001): “La visión de la Unión Industrial Argentina sobre las causas de la depresión. Propuestas para el crecimiento”, septiembre.